

N/REF: 0006/2023

La consulta plantea si resulta conforme con la normativa de protección de datos la comunicación por parte de la Comisión al Ayuntamiento de A Coruña —a través de su Policía Local— de los datos contenidos en el “*Sistema de Gestión de Datos de Abonado (SGDA)*” para mejorar la prestación del servicio de llamadas de **emergencia** a través del número 092.

I

La comunicación planteada supondrá una cesión de datos de carácter personal, que deberá fundarse en alguna de las bases jurídicas establecidas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

En primer lugar, sobre el cumplimiento de la obligación legal de permitir la prestación del servicio de *directorio telefónico* en condiciones de competencia efectiva y la específica cesión de datos que la misma conlleva, ya se expresó por la Agencia Española de Protección de Datos el criterio de que la misma *encontraba* tal habilitación legal *en la antigua Ley 11/1998*, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Así consta en el informe emitido por el Gabinete Jurídico de esta Agencia con fecha 6 de marzo de 2001, habiéndose igualmente emitido informe de fecha 23 de julio de 2002 en relación con el procedimiento para proporcionar tal información por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a tenor de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 26 de marzo de 2002, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.

Con carácter general, según se expone en los citados informes, la comunicación de los datos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia encuentra *su fundamento en la obligación legal* de garantía de la libre competencia en el mercado, que reconoce el interés legítimo de las

entidades que pretendan prestar el servicio de guía telefónica sobre números de abonado o de información sobre números de abonado en poder prestar dicho servicio en condiciones de libre competencia.

En la actualidad, la norma con rango de ley formal que habilita la cesión de datos, tanto en dicho supuesto, **como en el sometido a informe**, es la **Ley 11/2022**, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones —**LGTel**—.

La garantía del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal aparece expresamente reconocida entre los objetivos y principios de la Ley 11/2022, de 28 de junio, al establecer dentro de los mismos el artículo 3 k):

“defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección a las personas con discapacidad, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones;”

En relación con el acceso a la información sobre el número de abonados, esta Agencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, tal y como recuerda el Informe 1/2022, y, más recientemente —tras la entrada en vigor de la nueva LGTel—, el **Informe 53/2022**, en el que se señala:

“Los criterios mantenidos en los citados informes son igualmente aplicables tras la entrada en vigor de la reciente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que en su artículo 72.2, al regular las guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado, establece tanto la obligación de los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, así como la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular. Asimismo, dicha regulación debe ponerse en relación con el artículo 65.1.o), que después de reconocer el derecho de los usuarios finales a impedir la identificación de su línea lo excluye cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de

emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto”.

En concreto, en cuanto al deber de suministro de la información para la prestación en libre competencia de los servicios de edición de directorios telefónicos o realización de consultas telefónicas, el artículo 72.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, prevé que:

“Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada información y su posterior utilización a la presente ley y su normativa de desarrollo”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:

- a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;
- b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado;
- c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74;** (la negrita es nuestra)
- d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2. (...)”

Y, concretamente, en cuanto a los *“Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público”*, la exclusión de los usuarios finales a impedir la identificación de su línea cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112, se contiene en el **apartado o) del 65.1**, cuando señala:

“1. Los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores, según corresponda, de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público son, entre otros, los siguientes, que serán objeto de desarrollo mediante real decreto:

(...)

o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada.

Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto. (la negrita y el subrayado son nuestros)

Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea; (...)”

Asimismo, el artículo 66.3 dispone que:

“Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos: a) A figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la prestación de los servicios de información sobre números de abonado; b) A ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión; c) A no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre números de abonados que se presenten en el mercado”.

Entrando ya en el contenido concreto de la consulta, para el supuesto que nos ocupa —referido a las comunicaciones de emergencia—, de acuerdo con la regulación introducida por la vigente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, se obtiene que dicho tratamiento de datos vendrá legitimado por la concurrencia de la base jurídica del **artículo 6.1.c. RGPD**. En efecto, la citada norma incorpora de manera clara la existencia de una *obligación legal aplicable* al responsable en relación con el tratamiento de los datos personales a los que se refiere este informe —ex artículos 72, 74 y 65.1. o) LGTel—.

Y, a su vez, la necesaria protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física se constituye —asimismo— en base legítima para la cesión de los datos con información de carácter personal. Por ello, las comunicaciones de datos de carácter personal se ampararían también en el apartado **d)** del **artículo 6.1** del Reglamento General de Protección de Datos.

En consecuencia, a tenor de los preceptos a los que se ha hecho mención, **la licitud** para el tratamiento de los datos de carácter personal para la *“identificación y localización de las llamadas realizadas al número 092 de la Policía Local de (...)”* para la prestación del servicio de llamadas

de emergencia, **resulta de la concurrencia de ambas causas** de legitimación, esto es, tanto por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, como por la protección de intereses vitales, conforme, respectivamente, a los **apartados c) y d)** del artículo 6.1. RGPD.

II

Un adecuado análisis de la cuestión concreta relativa a la cesión del directorio de números de abonados para la prestación **de servicios de emergencia** exige, asimismo, el estudio concreto de la legislación aplicable con carácter general a los servicios de emergencia.

En lo que a la *legislación estatal* se refiere, la materia que nos ocupa aparece presidida por la **Ley 17/2015**, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que señala en su artículo 1.1 que *“La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.”*

El artículo 7 bis) se refiere al deber público de todos los ciudadanos de colaborar en la protección civil, disponiendo que:

“1. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley.

2. En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan.”

A su vez, el apartado 8 de dicho precepto indica que *“Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil.”*

La legislación estatal en este punto aparece completada por el **Real Decreto 903/1997**, de 16 de junio, que regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112.

Dicho Real Decreto instituye el número telefónico 112, según su artículo 2, como aquel que *“podrá utilizarse por los ciudadanos para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos competentes en materia de atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la posible necesidad de coordinar los anteriores, de protección civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan”*.

Es decir, como un mecanismo para requerir la asistencia de los servicios de emergencias correspondientes, pero no determina que dicho servicio 112 sea competente para responder a las emergencias, sino que redireccionará la solicitud de actuación a los servicios que en cada caso sean competentes. El art. 2.2 establece: *“Para garantizar la respuesta y atención adecuadas de las llamadas que se produzcan y asegurar una actuación rápida, ordenada y eficaz de los mencionados servicios, en el ámbito de las funciones y competencias que a cada uno le correspondan, las entidades prestatarias del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 adoptarán las medidas necesarias en relación con los servicios de urgencia de su dependencia y establecerán los acuerdos o convenios de colaboración que sean precisos cuando tales servicios no sean de su titularidad”*.

Además, en lo que a la identificación de la línea llamante afecta, el artículo 3.3 preceptúa:

“(…) Asimismo, dichos operadores facilitarán la identificación automática de la línea o zona geográfica desde donde se efectúen las llamadas al número telefónico 112, dentro de las posibilidades técnicas de la red y de acuerdo con la regulación que sobre las facilidades de presentación y limitación de la línea llamante se establezcan en la normativa nacional y comunitaria para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad de la vida humana o razones de interés público.

En todo caso, lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las medidas que se adopten para garantizar el secreto de las comunicaciones,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3 de la Constitución, y la protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y en sus normas de desarrollo y disposiciones complementarias”.

Tratándose de la ciudad de A Coruña, el artículo 2.1 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, engloba —dentro del sistema de protección civil— la actuación de *“Las administraciones públicas de Galicia, en cumplimiento de los fines de la presente ley y en el ámbito de sus respectivas competencias”*, que pretende garantizar la correcta integración de dicho sistema de protección civil y emergencias. Este sistema se basa en los principios de coordinación, solidaridad, participación, subsidiariedad, colaboración, responsabilidad pública y privada y lealtad institucional, promoviendo la asistencia y socorro mutuos con otras comunidades autónomas y en el ámbito transfronterizo.

De acuerdo con el artículo 1 de dicha Ley, el objeto del sistema de cuya regulación se trata, se dirige a la adopción de *“medidas preventivas que eviten situaciones de riesgo, a actuar en caso de riesgo ordinario y a proteger la integridad de las personas y los bienes de titularidad pública o privada y el medio ambiente de daños en situaciones de emergencia o grave riesgo provocados por catástrofes, calamidades, accidentes y otras situaciones o contingencias análogas”*.

En cuanto a la gestión de las emergencias —según dispone el artículo 3.2 de dicha norma—, se prevé *“La canalización unificada de las incidencias y alertas que se produzcan a través del número único europeo de emergencias 112”*.

El artículo 4 de dicha norma señala que los ciudadanos *tienen derecho* (i) a la actuación preventiva de los poderes públicos, como respuesta eficaz ante los riesgos y una adecuada protección de su integridad, de los bienes y del entorno, (ii) a ser informados de los riesgos que puedan afectarles y de las consecuencias de los mismos que sean previsibles, así como de los medios de

que dispone la Comunidad Autónoma de Galicia para hacerles frente, y (iii) a participar y ser escuchados en los procesos de elaboración de los planes de protección civil.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley, bajo el título “Derecho y deber de colaboración”, prevé que:

“1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de colaborar en las tareas de protección civil, y los mayores de edad el deber de colaborar, conforme a lo establecido en los planes y demás instrumentos de planificación contemplados en la presente ley y según las instrucciones de las autoridades de protección civil.

2. El deber de colaboración implica también la participación de los ciudadanos en los simulacros programados por las autoridades de protección civil. Este deber afectará de manera especial a las entidades públicas o privadas cuya actividad esté relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de las personas y sus bienes.

3. La colaboración regular con las autoridades de protección civil se realizará a través de las organizaciones del voluntariado de protección civil, de la Cruz Roja Española y de otras entidades existentes o que puedan crearse en el desarrollo de la presente ley.

4. Las ciudadanas y ciudadanos podrán colaborar también de forma ocasional con los servicios de emergencia, principalmente a través de convenios de colaboración que, a fin de facilitar esa participación, suscriba la Xunta con entidades públicas o privadas.”

Por su parte, el artículo 9 de la Ley regula la obligación específica de colaboración por parte de los medios de comunicación social, en los siguientes términos:

“1. Los medios de comunicación social, tanto de titularidad pública como privada, tienen la obligación de colaborar, de forma gratuita, con las autoridades de protección civil competentes en las situaciones de emergencia colectiva.

2. Esta colaboración se concreta en el deber de emitir, transmitir, publicar y difundir, de manera inmediata, prioritaria y destacada, si así se les requiere, la información, avisos, órdenes e instrucciones dictadas por las autoridades

competentes y dirigidas a la población. En todo caso, será necesaria la identificación de la autoridad emisora del mensaje.

De acuerdo con el apartado 1 de su artículo 37, la gestión de los riesgos ordinarios se organizará del siguiente modo:

“a) Cuando la emergencia afecte al territorio de un único municipio y los medios de que este disponga sean suficientes para la atención de la emergencia, la Agencia Gallega de Emergencias, **a través del Centro de Atención a las Emergencias 112 Galicia**, limitará su cometido a calificar el riesgo, movilizar los medios y realizar el seguimiento y cierre de la misma. (la negrita es nuestra)

b) En caso de que la emergencia afecte a más de un municipio o los recursos de este no fueran suficientes, la Agencia Gallega de Emergencias, a través del Centro de Atención a las Emergencias 112 Galicia, movilizará los medios necesarios y solicitará de la autoridad competente en materia de protección civil y emergencias la activación del plan correspondiente si fuera necesario. (...)

A su vez, el *Centro de Atención a las **Emergencias 112 Galicia*** tiene por objeto atender las *llamadas realizadas por los ciudadanos* ante situaciones de emergencia, darles el tratamiento correspondiente a las mismas y dirigirlos a los centros de atención de los servicios públicos que habrán de prestar la asistencia objeto de la llamada.

III

Centrado así el objeto del debate, tal y como se adelantó anteriormente, se desprende que la comunicación de los datos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ayuntamiento de (...) para la mejor prestación del servicio de emergencias 112 —o, tal y como se plantea en el presente caso, a través del **número corto 092**—, encuentra su fundamento, **tanto en la base jurídica del 6.1.c. RGPD**, al venir determinada por el cumplimiento de obligaciones legales, **como por la necesaria protección de intereses vitales**, conforme a los apartados **c) y d)** del artículo 6.1.del RGPD.

A mayor abundamiento, para el supuesto sometido a informe, las conclusiones anteriores deben ponerse en relación con lo dispuesto en la **Orden CTE/711/2002**, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, entre cuyo objeto se encuentra el referido en su Apartado Primero, 3. c), cuando prevé:

“Primero. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto:

(...)

3. La regulación del suministro de los datos sobre abonados que los operadores están obligados a proporcionar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que, de acuerdo con los citados artículos 67.1 y 14 del Reglamento del Servicio Universal, ésta pueda ponerlos a disposición de las entidades que:

a) Elaboren guías telefónicas impresas o electrónicas.

b) Provean servicios de consulta telefónica sobre números de abonados, mediante autorización general tipo D, a través de los códigos que se regulan en el capítulo IV de la presente Orden.

c) Presten servicios de llamadas de urgencia a través del número 112, y otras entidades que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por prestar servicios de llamadas de urgencia a través de números cortos. (la negrita y el subrayado son nuestros).

d) Estén autorizados para solicitar información previa a la interceptación en virtud del artículo 89.1 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.”

Por su parte, para la atención del servicio de llamadas de urgencia, el Apartado Decimoquinto 2) de dicha Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, dispone que:

“2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, previa petición, facilitará a las entidades que presten servicios de llamadas de urgencia a través del número 112, y a otras entidades que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por prestar servicios de llamadas de urgencia a través de números cortos, la información actualizada a la que se refiere el punto 1 del apartado decimocuarto, con el formato que se acuerde entre las partes. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente como soporte para una efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de urgencia, siendo responsabilidad de la entidad prestataria el adecuado uso de los mismos, que estará sometido a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.”

En resumen, tal y como se viene exponiendo, la cesión de Base de Datos de Abonados Telefónicos al Servicio de Emergencias 112 está claramente instrumentada como consecuencia de la obligación, impuesta por la ley, de que dicho servicio identifique la llamada entrante, con determinados

datos que se especifican en el transcrito Apartado Decimoquinto 2) de la Orden CTE/711/2002, para la atención del servicio de llamada de urgencia.

Así literalmente tanto dicha Orden como la restante normativa citada, especifica que la comunicación de los datos en cuestión es “*para una efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de urgencia*”. Tal y como se expone, la cesión se ampara en el interés vital del interesado. Es decir, el interés vital del interesado se contempla en la cesión de datos de los abonados de los directorios telefónicos como causa legitimadora, de conformidad con las previsiones legales al respecto.

En definitiva, entendemos que la **cesión** de la Base de Datos de Abonados Telefónicos por la CNMC a los Servicios de Emergencias 112 del Ayuntamiento de A Coruña —a través de su policía local— para prestar el servicio de información telefónica para la atención de emergencias, **también a través del número corto 092**, además de obtener su legitimación de lo previsto en el **apartado c)** del artículo 6.1, resulta también **conforme** con la normativa de protección de datos en razón de lo dispuesto en el **apartado d)** del mismo precepto del RGPD.

IV

Por otra parte, el *apartado Sexto* de la Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la **Circular 1/2013**, relativa al procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de guías, consulta telefónica sobre números de abonado y emergencias —BOE de 25 de abril de 2013—, establece las condiciones aplicables a las entidades habilitadas sobre el suministro de los datos de los abonados, enumerando en su punto 1 las siguientes:

- “a. La información solicitada será tratada única y exclusivamente para la prestación del servicio y/o para la finalidad para la que fue entregada.
- b. Los datos de los abonados que hayan sido suministrados serán actualizados conforme a lo dispuesto en la presente Circular.
- c. Los servicios prestados por las entidades con derecho a obtener la información de los abonados deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses desde la resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones otorgando el suministro, y se prestarán con las características, el contenido y en las condiciones previstas en la normativa específica que los regula.
- d. Se garantizará el respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos y, en particular, al derecho de información contenido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal y su normativa de desarrollo, cuya salvaguardia corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.”

Añade el punto 2 que *“el incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigibles a las entidades habilitadas comportará la revocación del suministro de los datos de los abonados a esa entidad, mediante resolución motivada de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos”*.

De este modo, la utilización de los datos para una finalidad distinta de la *exclusivamente* prevista por el Ordenamiento podrá dar lugar al inicio de las correspondientes actuaciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Finalmente, el órgano consultante deberá garantizar el pleno respeto de la legislación vigente en materia de protección de datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos, así como de lo establecido en la restante normativa vigente en materia de protección de datos, cuya salvaguardia corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.